



GD-F-008-V.9

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20164010065545 DEL 14/12/2016

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16° del Decreto 416 de 2007,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.709 el día 14 de mayo de 2010, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención para los fines del Decreto 416 de 2007 y periodicidad de las mismas.

Que en los artículos 3°, 4° y 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 se estableció el procedimiento para la expedición de la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado y se definieron los requisitos de información y documentación que el ente territorial debe acreditar para que esta superintendencia otorgue tal certificación.

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no de la cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los entes territoriales que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias y en su artículo 8° le otorgó competencia para que decida sobre los recursos de reposición que se interpongan contra tales actos administrativos.

2. DE LA RESOLUCIÓN DE NO CERTIFICACIÓN

Que tal como lo establece el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, las entidades territoriales debían enviar comunicación expresando su intención de ser certificados en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, acompañándola de la acreditación de la representación legal del solicitante y del poder correspondiente cuando se actuara a través de apoderado y

reportar al SUI la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la resolución en mención, antes del 30 de abril de cada año.

Que vencido el término para que el Municipio de Chinú Departamento de Córdoba, presentara la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010 y verificados los registros del archivo documental de esta Entidad, no se encontró manifestación de interés en ser certificado en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado y por tal razón se procedió a NO CERTIFICARLO mediante la Resolución No. SSPD 20164010026575 de 29 de julio del 2016.

La referida resolución fue notificada por aviso No. 20164010541601 del 13 de septiembre de 2016, recibido el 20 de septiembre de 2016 por el ente territorial tal y como se observa en el expediente.

Mediante escrito radicado bajo el No. 20165290701382 del 13 de octubre de 2016, enviado por correo certificado el 4 de octubre de la misma anualidad, el municipio interpuso oportunamente recurso de reposición contra la mentada resolución.

3. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1. El recurrente manifestó que los encargados del reporte de información le indicaron que los documentos exigidos por la Resolución No. 20101300015115 de 2010 fueron elaborados conforme a los lineamientos exigidos por la norma, que se realizó el cargue correspondiente y que al haberse llevado a cabo igualmente todos los años, se entendió por buena fe que se encontraba en su destino.

3.2 Agregó que conforme al inciso 3 del artículo 4 de la Resolución No. 20101300015115 de 2010, si la información estaba incompleta o no se encuentra cargada, la Coordinadora del Grupo de Certificaciones debía advertir con oportunidad la posible omisión involuntaria y ello no fue comunicado al ente territorial, por lo cual el municipio al hacer el reporte de información no intentó confirmarlo y solo advirtió la decisión de NO CERTIFICARLO hasta el 20 de julio de 2016.

3.3 Indicó que de conformidad con el principio de colaboración ente las Entidades del Estado, una vez advertido el impase que no constituye sanción, la administración procederá nuevamente al cargue de la información con el fin de ser certificado.

3.4 Alegó que en armonía con la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 el municipio, en calidad de prestador – supervisor quedó exento de cumplir con lo indicado en la mentada resolución toda vez que no se considera prestador de servicios públicos, por ser un operador privado AGUAS DE LA SABANA, desde diciembre de 2012, concesionado para la prestación, operación, explotación, administración integral y gestión total de los servicios públicos domiciliarios, por lo cual se le ofició a dicha empresa con el fin que asuma su rol conforme al citado acto administrativo.

3.5 Solicitó se revocara la decisión objeto de recurso y que se hicieran recomendaciones e el caso de existir un prestador privado que tiene obligaciones respecto al reporte de información al SUI.

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia Delegada procederá a analizar el único argumento expuesto, de la siguiente manera:

- **Del haber considerado estar cumpliendo con el reporte de información exigido para el proceso de certificación en materia de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, de la supuesta omisión de la Coordinación del Grupo de Certificaciones en informarle respecto a una presunta omisión en reporte de información, de su voluntad de subsanar el reporte de información y de la**

existencia de obligaciones de reporte para la empresa prestadora de servicios públicos en el ente territorial.

El recurrente manifestó que los encargados del reporte de información le indicaron que los documentos exigidos por la Resolución No. 20101300015115 de 2010 fueron elaborados conforme a los lineamientos exigidos por la norma y que se realizó el cargue correspondiente y que al haberse llevado a cabo igualmente todos los años, se entendió por buena fe que se encontraba en su destino.

Agregó que conforme al inciso 3 del artículo 4 de la Resolución No. 20101300015115 de 2010, si la información estaba incompleta o no se encuentra cargada, la Coordinadora del Grupo de Certificaciones debía advertir con oportunidad la posible omisión involuntaria y ello no fue comunicado al ente territorial, por lo cual el municipio al hacer el reporte de información no intentó confirmarlo y solo advirtió la decisión de NO CERTIFICARLO hasta el 20 de julio de 2016.

Indicó que de conformidad con el principio de colaboración ente las Entidades del Estado, una vez advertido el impase que no constituye sanción, la administración procederá nuevamente al cargue de la información con el fin de ser certificado.

Alegó que en armonía con la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 el municipio, en calidad de prestador – supervisor quedó exento de cumplir con lo indicado en la mentada resolución toda vez que no se considera prestador de servicios públicos, por ser un operador privado AGUAS DE LA SABANA, desde diciembre de 2012, concesionado para la prestación, operación, explotación, administración integral y gestión total de los servicios públicos domiciliarios, por lo cual se le ofició a dicha empresa con el fin que asuma su rol conforme al citado acto administrativo.

Solicitó se revocara la decisión objeto de recurso y que se hicieran recomendaciones e el caso de existir un prestador privado que tiene obligaciones respecto al reporte de información al SUI.

Con relación al argumento en comento se debe recordar que el proceso de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, se rige por lo dispuesto en la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, que definió la metodología a observarse por parte de los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Por consiguiente, el acto administrativo de no certificación se expide no sólo para los municipios que manifestando su interés en obtenerla no cumplan con las exigencias normativas para el efecto, **sino también para todos aquellos que siendo beneficiarios de regalías y compensaciones monetarias no hayan manifestado interés en conseguirla, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 6 de la resolución en mención, que señala:**

“Parágrafo 1°. Se entenderá que la entidad territorial que no presente la solicitud mencionada en el artículo 4° de la presente resolución, dentro de los plazos establecidos, no está interesada en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto, mediante acto administrativo motivado, la Superintendencia NO CERTIFICARÁ al respectivo ente territorial.”

En efecto, el acto administrativo objeto de recurso de reposición bajo estudio, da aplicación a tal disposición toda vez que de una parte, el Municipio de Chinú fue relacionado como beneficiario de regalías directas y compensaciones monetarias en el radicado No. SSPD 20165290123362 y 20168100075612 del 1 de marzo de los corrientes, remitido a esta Entidad por la Agencia Nacional de Minería y de otra, **en atención a que el ente territorial no presentó a 30 de abril del 2016**, la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

En este entendido, es claro que el ente territorial fue NO CERTIFICADO toda vez que NO manifestó su interés de obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado antes del 30 de abril de 2016.

4 Sobre el particular es preciso mencionar, que los plazos constituyen una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 “Las normas

procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley".

La Corte Constitucional se ha pronunciado así al respecto¹ en los siguientes términos:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."

Ahora bien, respecto al argumento de buena fe es de recordar que dicho postulado exige que tanto los particulares como las autoridades públicas deben ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta. Además, el artículo 83 de la Constitución Política consagra que tal principio debe presumirse en todas las gestiones que adelanten aquellos ante éstas.

Por lo anterior, este Despacho advierte que de acuerdo con lo determinado en el artículo 83 constitucional se ha presumido en todo momento la buena fe del municipio en su actuar, así como de su disposición para el cumplimiento de sus deberes legales, particularmente en lo que respecta al proceso de certificación para la vigencia 2015 que es el objeto de estudio en la presente actuación administrativa, no obstante, ello no implica que el simple actuar de buena fe del municipio sea suficiente para exonerarlo del cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de certificación de coberturas mínimas en acueducto y alcantarillado dentro de los términos estipulados en las normas pertinentes.

En este entendido es claro que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 4° de la Resolución No. 20101300015115 de 2010 sin solicitar la certificación objeto de estudio, la única decisión viable que podía tomar esta Superintendencia consistía en no certificar al ente territorial.

Lo anterior permite colegir igualmente que no se dieron los presupuestos para la aplicación del inciso tercero del artículo cuarto de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010, conforme al inciso segundo *ibidem*, veamos:

"... Una vez recibida la solicitud, el Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información verificará si el municipio, distrito o departamento se encuentra en el listado de beneficiarios de regalías directas o compensaciones, que envíe el Departamento Nacional de Planeación a la Superintendencia a más tardar el 30 de enero de cada año.

Si las informaciones o documentos remitidos no son suficientes o no reúnen todos los requisitos exigidos, el Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información podrá requerir por escrito a la principal autoridad territorial, por una sola vez, solicitándole con precisión que aporte la información o documentación faltante. En todo caso, la posibilidad de requerir información adicional o su complementación sólo se aplica respecto del requisito establecido en el numeral 2 del artículo 3° de la presente resolución, para lo cual, la entidad territorial deberá enviar esta información a más tardar el 9 de junio del año correspondiente.

El Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, una vez verificados los requisitos y trámites previstos en la presente resolución, tendrá hasta antes del 31 de julio de cada año para expedir la certificación de cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los departamentos, municipios y distritos que la hayan solicitado, la cual se realizará con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, según lo previsto por el artículo 16 del Decreto 416 de 2007"

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

Lo anterior, toda vez que, según lo expuesto en la norma, es claro que el requerir información adicional es facultativo de la Coordinación del Grupo de Certificaciones e Información y que aun así, este requerimiento no era aplicable para el caso concreto, al no haber mediado una solicitud de certificación por parte del ente territorial.

Ahora bien, de la norma citada también se evidencia que el plazo para proferir la resolución que decide el proceso de certificación de coberturas mínimas fue el 31 de julio de 2016 y por ende al haberse proferido la decisión objeto de recurso el 29 de julio de la misma anualidad, no se evidencia irregularidad alguna en la expedición de dicho acto administrativo.

Conforme a lo anterior, se precisa que para el caso concreto y en las circunstancias descritas previamente, la discusión de aspectos atinentes a la responsabilidad de reportar o no información conforme a la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 no es predicable, toda vez que al no mediar siquiera una solicitud de certificación, por expresa disposición normativa, no es dable verificar los aspectos del cumplimiento o no de los requisitos de reporte para el proceso de certificación. No obstante, se advierte que si considera que existe alguna irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones que le asisten a la prestadora de servicios públicos en el ente territorial, debe poner en conocimiento dicha circunstancia a la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado y de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo, con el fin que se adelanten las medidas de vigilancia y control que sean pertinentes.

Finalmente, se considera procedente recordar que el artículo 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 preceptúa que la consecuencia de la no certificación, es el no permitir a la entidad territorial no certificada, el cambio de la destinación de sus recursos de regalías directas y compensaciones monetarias.

Así las cosas, no se accederá a revocar la resolución objeto de recurso, la cual en consecuencia será confirmada.

Que por lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010026575 de 29 de julio del 2016, proferida por la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente la presente resolución al Municipio de Chinú Departamento de Córdoba, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 69 del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE el contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación - DNP.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Bogotá D.C.



MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO
Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Katherine Arenas – Abogada Contratista - Grupo de Certificaciones e Información
Expediente: 2016401351601223E